



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, siete de octubre de dos mil veintidós

21-004

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-002-2019-00046-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 30** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que tras declarar que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, por contar con más de 750 semanas al 1º de abril de 1994 y haber alcanzado los 60 años el 4 de enero de 2015, se condene a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar el reajuste de la pensión de vejez aplicando un monto del 90%, desde su causación, los incrementos pensionales por tener a su cargo a su cónyuge MARIA ELENA ARROYAVE MEJÍA, los intereses moratorios, la indexación, lo que ultra y extra petita resulte probado y las costas del proceso

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 22 de enero de 1955, por lo que a la fecha tiene 64 años, lo que significa que es una persona de la tercera edad y por ende beneficiaria de la condición más beneficiosa consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política, el principio de proporcionalidad y el derecho irrenunciable a la seguridad social.
- Que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 39 años de edad y había acreditado más de 750 semanas cotizadas, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, alcanzando los 60 años, edad mínima para la pensión de vejez el 22 de enero de 2015.
- Que estuvo afiliado al ISS desde el 2 de febrero de 1976 hasta octubre de 2016 habiendo cotizado 1.460,29 semanas.
- Que mediante Resolución GNR 28995 del 24 de enero de 2017 COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez bajo el régimen común, con un IBL de \$837.081 al cual le aplicó un monto del 69.43% a partir de febrero de 2017, negándole el régimen de transición.
- Que contrajo matrimonio con la señora MARIA ELENA ARROYAVE MEJÍA el 17 de noviembre de 1979 con quien convive hasta la actualidad sin haber llegado a separarse, por lo que tiene derecho al incremento pensional del 14% consagrado en el Decreto 758 de 1990, ya que esta depende económicamente de él, pues no labora ni tiene ningún tipo de ingresos propios.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como ciertos la fecha nacimiento del actor, así como el contenido de la Resolución expedida por la entidad. Respecto a los demás manifestó que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora que serán objeto de debate probatorio.

1.3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el **13 de noviembre de 2020**, se **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA**, a quien se abstuvo de condenar en costas.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que si bien el demandante en principio era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tener más de 15 años de servicio al 1º de abril de 1994, conforme a las pruebas aportadas se había acreditado que cumplió el último requisito para acceder a la pensión de vejez, es decir, los 60 años de edad el 22 de enero de 2015, fecha para la cual ya había expirado la vigencia del régimen de transición en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció como plazo máximo para la aplicación del mismo al 31 de diciembre de 2014, sin que esto implique la transgresión de derechos del actor, ya que para él no era un derecho adquirido por no haber cumplido los requisitos de edad y número de semanas en vigencia del aludido régimen de transición, es decir, que la pensión aún no había entrado a su patrimonio y por tanto el legislador podía introducir modificaciones respecto a los requisitos para acceder a la misma. Por consiguiente concluyó que no es posible reconocer su prestación en aplicación del Decreto 758 de 1990 sino que debe acudir a la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003, tal y como efectivamente lo hizo la entidad demandada, por lo que absolvió de la pretensión de reajuste la pensión de vejez.

De otro lado, aclaró que no podía pronunciarse frente a una reliquidación del monto conforme la Ley 797 de 2003 de forma ultra o extra petita, como lo solicita la parte actora en sus alegatos, porque en los hechos de la demanda no se hizo relación a que el monto aplicado con esta normatividad fuera insuficiente o que hubiera lugar a reajuste, por lo que se afectaría el derecho de defensa de Colpensiones

Finalmente, estimó que frente al tema de la vigencia de los incrementos pensionales por persona a cargo contemplados en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no existe unanimidad en las posiciones de las Altas Cortes, sin embargo a partir de la sentencia SU-140 de 2019, la Corte Constitucional determinó que estos habían sido derogados por la Ley 100 de 1993 y solo podían aplicarse a aquellos pensionados que causaron el derecho a la pensión de vejez en vigencia del Decreto 758 de 1990, dado que el régimen de transición solo conservó aspectos atinentes a la pensión y no los accesorios como lo son los incrementos pensionales, por lo que en acatamiento del precedente jurisprudencial, estimó que como el demandante se pensionó en vigencia de la Ley 100 de 1993 no le son aplicables los referidos incrementos pensionales, aunado al hecho que a este ni siquiera se le reconoció la pensión conforme al aludido decreto, dado que se hizo en aplicación de la Ley 100 con la modificación de la

Ley 797 de 2003, por lo que absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

2.2. APELACIÓN DEMANDANTE

Señaló que dado que tanto en la demanda se solicitó que se condenara ultra o extra petita con base a lo que resultare probado en el proceso, se debe revisar el IBL de la pensión bajo el régimen común, dado que fue adjudicado un monto del 69.43%, el cual debe ser más alto, pues el tope llega hasta el 80% y el actor cotizó más de 1300 semanas, además también debe revisarse el tema de aplicarse el tema de la aplicación del régimen de transición.

2.3. ALEGATOS COLPENSIONES

La apoderada de la entidad demandada indica que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, toda vez que al demandante no le asiste derecho al reconocimiento de pensión la de vejez bajo el régimen de transición, toda vez que el señor AMADO DE JESUS LOPERA LOPERA, no acreditó el requisito de edad antes del 31 de diciembre de 2014, situación que lleva a la pérdida del régimen de transición, ya que cumplió los 60 años con posterioridad a esa fecha, es decir los cumplió en el año 2015, por lo que no reúne el requisito de la edad conforme el Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez conforme al mencionado Decreto.

De otro lado, frente al reconocimiento de los incrementos pensionales tenemos que el demandante, el señor Lopera Lopera, no tendría derecho a dichos incrementos pensionales, toda vez que la Sentencia SU-140/19, la corte determinó que los incrementos previstos en el Decreto 758 de 1990, para las pensiones mensuales de invalidez y vejez por cónyuge, compañero (a) o hijos menores o inválidos a cargo del beneficiario fueron derogados por la Ley 100 de 1993. Por ello no habría lugar al reconocimiento de estos.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si al demandante le asiste o no derecho a que le sea reconocida la pensión de vejez según lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, en aplicación del régimen de transición, adicionalmente se analizará si el juez debió en uso de sus facultades ultra y extra petita analizar si el

actor tenía derecho al reajuste del monto de la pensión que le fue reconocida conforme la Ley 797 de 2003.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, se encuentra probado el señor AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA al 1º de abril de 1994, tenía cotizadas **770.61** semanas, por lo que en principio le es aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que le permitiría que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al cual venía afiliado a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, que en su caso es el Decreto 758 de 1990, normatividad que exige como requisitos para acceder a la pensión de vejez acreditar 60 años de edad en el caso de los hombres y un mínimo de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier tiempo.

Sin embargo, en el año 2005 el CONGRESO DE LA REPÚBLICA expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, que reformó el artículo 48 de la Constitución Nacional y limitó el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, restringiendo su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, salvo para quienes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo tuvieran más de 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, con el fin de proteger su expectativa legítima, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

En el caso de autos, el señor AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA cumplió los 60 años de edad el 22 de enero de 2015, dado que nació el mismo día y mes de 1955, fecha para la cual ya había expirado la vigencia del régimen de transición en los términos del referido Acto Legislativo.

Al respecto, debe indicarse que el régimen de transición no se ha equiparado a un derecho adquirido, incluso, la Corte Constitucional mediante sentencia SU 130 de 2013, reiteró que un derecho adquirido requiere que se reúnan las condiciones necesarias para su existencia antes de que se presente el tránsito legislativo, momento en el que opera la garantía de inmutabilidad entendida como la verdadera aplicación del principio de la irretroactividad de la ley dado que la nueva norma no puede regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, ello en aras de la necesidad de mantener la seguridad jurídica. Por el contrario, en el caso de meras expectativas, la persona únicamente tiene una probabilidad de adquirir en el futuro un derecho, el cual puede ser objeto de modificación por el legislador pues no se favorece por la protección constitucional aludida, aunque se debe tener presente que cualquier cambio normativo debe consultar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y confianza

legítima. Por tal razón, la Corte ha señalado que cuánto más cerca está una persona de acceder al goce efectivo de un derecho, mayor es la legitimidad de su expectativa en éste sentido, razón por la cual, en materia de pensiones, los cambios normativos han propendido por la protección de aquella población que ha cumplido el 75% del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión de vejez, al impedir que terminen perdiendo la posibilidad de cumplir las condiciones con las que aspiraban pensionarse, aplicando así el principio de proporcionalidad.

Sumado a lo anterior, existe una categoría intermedia llamada expectativa legítima frente a la cual se puede aplicar el principio de no regresividad en especial cuando se trata de un cambio legislativo intempestivo y arbitrario que afecta las aspiraciones pensionales que se encuentran próximas a consolidarse.

La Corte Constitucional, en la providencia en mención, indicó:

“Frente a un tránsito legislativo, el acceso al régimen de transición en pensiones no es un derecho adquirido sino una expectativa legítima, si al momento de entrar en vigencia el SGP el trabajador no ha cumplido con todos requisitos exigidos por la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, conforme con el régimen al cual se encuentra afiliado.

Desde esa perspectiva, consideró que “el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado”, razón por la cual, en ejercicio de su amplia libertad de configuración normativa, puede, restringir o limitar el acceso de los trabajadores al régimen de transición previsto en la Ley 100/93”

Y en la Sentencia C-663 de 2007 explicó que los regímenes de transición “ (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”.

No está por demás, recordar que el fin primordial de todo régimen de transición es servir como un mecanismo de protección de los afiliados a un sistema pensional, con el propósito de evitar arbitrariedades en la configuración legislativa. Por lo tanto, si bien en cualquier momento se puede modificar el régimen legal que establece las condiciones para adquirir el derecho a la pensión, y aun, el régimen de transición que se haya establecido, no se podrá introducir abruptamente nuevas reglas sin considerar la situación de aquellos afiliados que están próximos a consolidar su derecho pensional; a menos que exista una justificación razonable y proporcionada acorde con los fines del Estado social de derecho.

Sobre el particular la Sala de Casación Laboral ha referido que en un Estado respetuoso de los derechos fundamentales de sus asociados, las modificaciones al sistema pensional, deben en primer lugar respetar los derechos adquiridos, lo que evidentemente acontece cuando el afiliado ha consolidado el derecho a la pensión bajo las reglas o condiciones de la normativa modificada; en segundo lugar, evitar introducir abruptamente nuevas reglas sin considerar la situación de aquellos afiliados que están próximo a consolidar su derecho pensional, lo que tal y como se indicó, no aconteció en este caso, ni puede en este punto echarse mano del argumento según el cual para el 1 de abril de 1994 el demandante satisfacía determinada densidad, dado que para entonces muy lejos estaba de cumplir la edad, pues aún debía esperar por los menos 21 años.

Tal posición comporta el criterio que aún hoy mantiene la Sala de Casación Laboral, consúltese para el efecto las sentencias de radicación 74.422, 68325 y 67458 expedidas en junio y julio de 2019 según las cuales el estatus de derecho adquirido se predica únicamente de la pensión de vejez mas no del régimen de transición y precisó que si bien el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que aquel se mantuviera indeterminado, lo cierto es que ello no conllevaba la transgresión o vulneración de derechos adquiridos a los afiliados al Régimen de Prima Media, recalcando que el deber de respetar el principio de confianza legítima no implica que el legislador estuviese obligado a mantener una disposición legal en el tiempo, ya que ésta podrá ser modificada bajo los parámetros de justicia y equidad, en asocio con el principio de sostenibilidad financiera según el cual no era factible mantener un sistema pensional inviable.

En sentencia con radicación 72393 de 2019 (SL 1347-2019) dijo la Corte:

“No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que *«se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella»* (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una *expectativa*, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Según lo dicho, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido; esa situación corresponde, por el contrario, a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema.

Posición reiterada en sentencias como 72752 de 2020 (SL 5127-2020) donde se señaló:

“Es de anotar, que la Sala de manera pacífica ha reiterado que el derecho a la pensión de jubilación, o de vejez, se causa cuando concurren los dos requisitos exigidos en la ley, es decir, la edad y el tiempo

de servicios, o densidad de semanas cotizadas, por manera que, hasta tanto el afiliado no los cumpla, no puede hablarse de un derecho adquirido sino de una mera expectativa, lo que se encuentra en perfecta armonía con lo contemplado por el AL 01 de 2005, en el que se consagra «*Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, [...]*». Es por ello, que al momento histórico en que confluyan los dos requisitos antes señalados, se convierten en parte integral del patrimonio del afiliado y, por tanto, no puede ser arrebatado o quebrantado por quien lo creó o reconoció legítimamente, al respecto la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL3851-2020 que reiteró la CSJ SL 4040-2019, donde expuso:

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Según lo dicho, no puede afirmarse que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido, dado que esa situación corresponde a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema.”

En consecuencia considera la Sala que le asistió razón a la a quo para declarar que al demandante no puede aplicársele el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende su pensión no puede ser reconocida de conformidad con el Decreto 758 de 1990, sino en atención a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como en efecto lo hizo la entidad a través de la resolución GNR 28985 del 24 de enero de 2017 visible a folios 14/18, por lo que se debe CONFIRMAR la decisión de primera instancia en este punto.

De otro lado, solicita la parte actora en su recurso que en uso de las facultades ultra o extra petita y con base a lo que resultare probado en el proceso, se debe revisar el IBL de la pensión bajo el régimen común, dado que fue adjudicado un monto del 69.43%, el cual debe ser más alto, pues el tope llega hasta el 80% y el actor cotizó más de 1300 semanas.

Respecto a dicha solicitud debe precisarse en primer lugar que en la demanda que dio origen al presente litigio, solo se solicitó como pretensión que tras declararse que el demandante era beneficiario del régimen de transición se condenara a COLPENSIONES a reajustar su pensión de vejez con un monto del 90% conforme al Decreto 758 de 1990, más no se pidió la reliquidación del monto aplicado conforme a la Ley 797 de 2003, ni se planteó ningún hecho que tuviera relación con esta pretensión, por lo que en esta instancia no es posible siquiera revisar dicha pretensión, dado que el juez de segunda instancia no tiene facultades de fallar ultra y extra petita, conforme lo dispone el artículo 50 del CPT y la SS:

«El Juez de (primera instancia) podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.»

El texto entre paréntesis fue declarado inexecutable por la Corte constitucional en sentencia C-662 de 1998, en el sentido de que es una facultad que también la tienen los jueces de única instancia.

Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4398 de 2020 cuando dijo.

“Así pues, la segunda instancia, no tiene una competencia plena para resolver el pleito, de modo que sólo podrá pronunciarse respecto de aquellos asuntos que el apelante identificó y sustentó en su impugnación, derivados de los hechos expuestos en la demanda, controvertidos en la contestación y que sustentan las pretensiones y excepciones formuladas por las partes. Distinto es el caso de la competencia derivada del grado jurisdiccional de consulta, puesto que en éste no se propone una pretensión, sino que se ejerce un control de legalidad cuya causa es el ordenamiento jurídico procesal.”

Aunado a lo anterior, tal como lo analizó el a quo, cuando negó incluir dentro de la fijación del litigio la pretensión de reliquidar el monto de la pensión conforme la Ley 797 de 2003 y como lo dijo en la sentencia, no podía estudiar esta solicitud ni aun en uso de las facultades ultra y extra petita, pues en parte alguna de los hechos de la demanda se hizo alusión a que el monto del 69.43% con que fue liquidada la pensión del actor hubiera sido deficitario o que este tuviera derecho a uno superior o que la entidad le hubiera dejado de tener en cuenta semanas efectivamente cotizadas, sino que la demanda solo se centró en establecer que este tenía derecho a que se aplicara régimen de transición y que por tanto su prestación se reliquidara conforme al Decreto 758 de 1990, por lo que al no haber sido un hecho debatido en el proceso, no era posible, ni en uso de las facultades del artículo 50 del CPT y de la SS fallar por fuera de lo pretendido, porque se vulnerarían los derechos de defensa y debido proceso de COLPENSIONES, sorprendiendo a la demandada con una sentencia que no guardara coherencia con lo pedido, debatido y probado dentro del proceso, por lo que estima la Sala que le asistió razón al a quo cuando se abstuvo de pronunciarse frente a esta petición y por tanto no prosperan los argumentos esbozados por el apoderado del demandante en su recurso.

En consecuencia se CONFIRMARÁ la decisión absolutoria de primera instancia en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de noviembre de 2020, dentro del proceso ordinario promovido por el señor **AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA** identificado con cedula de ciudadanía N° **70.503.453** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **AMADO DE JESÚS LOPERA LOPERA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-002-2019-00046-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **07/10/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **10/10/2022** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario